

BALANCE DE GRUPOS ARMADOS 2025

León Valencia
Director Fundación Paz & Reconciliación

Laura Bonilla
Subdirectora Fundación Paz & Reconciliación

Coordinador

Francisco Daza
Coordinador de la Línea
Paz, Seguridad y Derechos Humanos

Investigadores:

Santiago Medina

Nicolas León

Nataly Páez

Anderson Salinas

Andrés Paternostro

Lina María Rosero

Katia María Rosero

Paola Andrea Marín Molano

Pasantes:

Cristian Castro.

Ximena Alejandra Riaño.

Alejandra Caballero.

TIC:

Coordinadora

Diana Herrera

Visualizador de Mapas

Pedro Ruiz

© Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2025
Calle 26B, 4A-45, piso 15, Bogotá D.C.
pares.com.co

Este informe se terminó de editar el 9 de diciembre de 2025. Elaborado por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Edición y diagramación por: Equipo de comunicaciones.

Con el apoyo de





APARTADO METODOLÓGICO

El análisis de la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se inscribe en un esfuerzo acumulado de Pares desde 2018 para documentar, monitorear y explicar la evolución de las conflictividades armadas y las economías ilegales en Colombia. En estos siete años hemos construido una metodología propia que combina sistematización rigurosa de información secundaria, lectura territorial cualitativa, análisis comparado y georreferenciación de dinámicas armadas. Esta línea de trabajo ha permitido observar la transición del país hacia un nuevo ciclo de violencia, caracterizado por la expansión multicrimen, la fragmentación de actores y la recomposición de economías ilícitas.

A partir de esta trayectoria, el análisis del período 2024–2025 se desarrolló con un enfoque orientado a identificar patrones de continuidad, mutación y reacomodo territorial de los grupos armados, particularmente en zonas donde convergen repertorios híbridos de control —coercitivos, políticos, económicos y simbólicos— que no siempre se manifiestan en hechos violentos visibles.

a. Fuentes y universo de información

El universo analítico está compuesto por 1.889 registros de presencia armada entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Estos datos provienen de fuentes abiertas, informes institucionales, boletines oficiales, reportes de organizaciones sociales, sistemas de alerta humanitaria y observatorios locales de derechos humanos. Este ecosistema de fuentes permite un contraste territorial robusto y una verificación cruzada que reduce sesgos de subregistro.

La base histórica desde 2018 ha permitido calibrar mejor la interpretación de estas presencias, puesto que contamos con series largas sobre continuidad, reaparición, expansión, sustitución y retirada de actores armados en más de 300 municipios. Esto ha hecho posible distinguir entre fluctuaciones coyunturales y patrones estructurales de control territorial.

Del total de registros del período 2024–2025, 1.574 corresponden a presencias activas, clasificadas en cuatro categorías analíticas construidas por Pares desde 2018:

- **Nueva presencia:** ingreso reciente del actor al municipio o al área rural específica.
- **Presencia continua:** control o influencia sostenida, independientemente de la variación en hechos violentos.
- **Presencia intermitente:** reaparición periódica asociada a objetivos puntuales, rutas, economías o disputas.
- **Presencia inactiva:** el actor mantiene redes o capacidad instalada, aunque no registre hechos recientes.

Estas categorías han sido validadas en múltiples investigaciones de Pares, y hoy constituyen uno de los insumos más precisos para el seguimiento académico y operativo de los grupos armados en Colombia.

b. Diseño de la base de datos y clasificación de variables

La base de datos combina variables cualitativas y cuantitativas que permiten describir la presencia armada desde múltiples dimensiones: Variables cualitativas nominales: departamento, municipio, corregimiento, vereda, lugar de referencia, grupo armado, bloque, frente, tipo de disputa, tipo de presencia y fuente. Estas variables permiten captar la territorialidad fina, así como el nivel organizativo de los actores.

Variables cualitativas dicotómicas (conteo por municipio y conteo disputa): indicadores binarios (1/0) para evitar duplicidades y registrar enfrentamientos o cohabitación conflictiva entre GAO. Estas variables han demostrado ser esenciales desde 2018 para diferenciar entre presencia superpuesta y presencia competitiva.

Variables cuantitativas continuas: latitud y longitud para la georreferenciación de cada registro y su articulación con Sistemas de Información Geográfica (SIG). Gracias a la base histórica desde 2018, hoy es posible identificar corredores, nodos, cuellos de botella, puntos de irradiación y zonas de reacomodo.

c. Procedimiento metodológico

El análisis se desarrolló en tres fases encadenadas:

- Recolección y sistematización**

Se realizó un rastreo permanente de fuentes secundarias verificables. La información fue integrada en una matriz maestra que conserva la trazabilidad histórica desde 2018, lo que permite comparar patrones de expansión y continuidad en series de mediano plazo.

- Depuración y control de consistencia**

A través de conteo por municipio se eliminaron duplicidades y se garantizó coherencia interna. La experiencia acumulada en depuración desde 2018 ha permitido afinar criterios específicos para distinguir entre expansión real, ruido informativo y presencias simbólicas de baja intensidad.

- Análisis descriptivo, espacial y comparativo**

Se aplicaron técnicas descriptivas para identificar tendencias, puntos de inflexión y cambios en la distribución territorial de los actores. El análisis espacial permitió ubicar corredores estratégicos, superposiciones y zonas críticas. El componente comparativo con la serie 2018–2024 posibilitó detectar patrones sostenidos de avance de economías ilícitas y recomposición de alianzas criminales.

d. Enfoque interpretativo y alcances

El enfoque de Pares parte de la siguiente premisa: la presencia armada es una expresión territorial que combina coerción, regulación informal, administración de economías ilícitas y control social, aun cuando no exista un registro persistente de hechos violentos. Este enfoque ha sido refinado desde 2018 a partir de estudios de campo, entrevistas cualitativas, monitoreo humanitario y series de datos, lo que ha permitido identificar:

- presencias difíciles de detectar que se sostienen mediante acuerdos locales;

- presencias híbridas donde convergen crimen organizado, disputas políticas e intereses económicos;
- presencias simbólicas que mantienen el orden violento sin necesidad de ocupación permanente;
- presencias funcionales que articulan actores políticos, economías ilegales y redes locales.

La base de datos captura estas modalidades y permite aproximarse a lógicas más complejas que las medidas únicamente basadas en número de eventos violentos. De este modo, el instrumento metodológico se consolida como una herramienta dinámica y acumulativa, que respalda el seguimiento estructural que Pares realiza sobre la recomposición del panorama armado colombiano desde 2018.

Capítulo 1. Balance nacional de la violencia y la presencia armada (2018–2025)

1. Introducción: el retorno del ciclo armado

El presente capítulo ofrece una lectura integral de la evolución de la violencia armada en Colombia entre 2018 y 2025, a partir de los hallazgos de PARES y de otras fuentes nacionales e internacionales. Analiza los factores estructurales, coyunturales y políticos que explican el nuevo ciclo de violencia, así como las limitaciones de la respuesta estatal frente a los grupos armados organizados y las economías ilegales.

Ya en 2024 lo advertimos en nuestra investigación publicada con el apoyo de Planeta bajo el título ¿Plomo es lo que viene? Balance de la paz total. En aquel momento señalábamos tendencias preocupantes en los números: un deterioro sostenido desde 2018, que se agudizó hacia 2022 y que para 2025 consolida un nuevo ciclo de violencia armada en Colombia. Este fenómeno ha sido injustamente atribuido a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que en realidad representa sólo un factor dentro de un ecosistema mucho más amplio de variables que están empujando al país hacia una nueva fase de violencia, poniendo en entredicho tanto las estrategias de paz como las de guerra.

Para comprender este nuevo ciclo, PARES compara tres momentos de presencia armada fundamentales: 2019, 2022 y 2025.

El primer punto de referencia – el 2019 – marca el escenario posterior a la desmovilización de las FARC. Ese año comenzaron a consolidarse las primeras disidencias, mientras remanentes o herederos de las estructuras paramilitares se reagrupaban y expandían su control territorial. De esa reorganización surgiría el hoy bloque armado más grande del país: el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), otrora AGC.

Durante el cuatrienio del presidente Iván Duque, la pandemia del COVID-19 jugó un papel determinante. Los grupos armados aprovecharon el repliegue estatal para expandirse y reorganizar los mercados ilícitos.

Aunque el tamaño total del impacto pandémico debe estudiarse a mayor profundidad, ya es verificable que el narcotráfico se transformó mediante una rápida adaptación: los grupos se sobreespecializaron en ciertos eslabones de la cadena y evitaron los riesgos del tráfico transnacional. En zonas como el Catatumbo se popularizó la expresión “se la ponemos en la frontera”, reflejo de un modelo en el que grupos con capacidad de cruzar hacia Venezuela —como el ELN— adquirieron una ventaja competitiva al regular tránsitos y ofrecer protección extendida.

Para los productores locales, la disminución de ganancias en los eslabones superiores generó un incentivo perverso: aumentar la producción para mantener flujo de caja.

En 2020 la fabricación de cocaína alcanzó niveles récord con **1.982 toneladas producidas** (11% más que en 2019), y la expansión continuó en 2021–2022 hacia nuevos mercados (UNODC, 2022).

En regiones no cocaleras, la pandemia permitió a los grupos ilegales regular con violencia la vida comunitaria. Lograron en pocos meses lo que a las FARC les tomó décadas: eliminar competencia civil y democrática, imponer funciones de seguridad y justicia, y redistribuir rentas locales, mientras los gobiernos concentraban esfuerzos en la atención sanitaria. (Fundación PARES, 2020)

El segundo punto clave de referencia es el 2022. En tan sólo tres años, el tamaño, la capacidad y la expansión de los grupos armados crecieron de forma acelerada y sostenida, especialmente entre las disidencias

de las FARC. Este auge coincidió con un vacío prolongado de acción estatal: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 fue escasa e inconsistente, y las operaciones militares no sólo fallaron en contener el crecimiento armado, sino que devolvieron años de avance en la recuperación territorial.

La ausencia de servicios de policía, justicia y protección efectiva a líderes sociales permitió que los nuevos armados se asentaran rápida y eficientemente, asesinando impunemente a líderes sociales entre el 2016 y el 2022 y desestructurando el tejido democrático necesario para una reconstrucción regional propia de un posconflicto (INDEPAZ, 2025).

Según la Fiscalía General de la Nación, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2024 se registraron 1.372 casos de homicidios de líderes sociales. Sólo el 16% ha llegado a condena, lo que equivale a una tasa de impunidad del 83,6%. Cada año se suman en promedio 150 líderes asesinados. De cada tres homicidios, dos presentan presunta autoría de estructuras armadas organizadas.

Para 2021–2022, organizaciones de derechos humanos —entre ellas Indepaz y PARES— alertaron sin éxito que el asesinato de líderes sociales conduciría al fortalecimiento de los grupos disidentes.

La política de seguridad del gobierno estaba completamente desarticulada de la política de protección a derechos humanos, generando incrementos dramáticos en homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones y, especialmente, en extorsión.

La extorsión se convirtió en fuente principal de rentas para estructuras armadas y delincuenciales, tanto urbanas como rurales, combinando miedo, control territorial y acumulación de activos. El año 2022 llegó con una presencia ya consolidada de actores armados y una profunda frustración social frente a la ausencia estatal.

Entre 2022 y 2025, el país transita una fase de recomposición armada y estancamiento institucional que redefine la geografía de la violencia. Tras el cambio de gobierno, la expectativa de una “paz total” coexistió con un repunte sostenido de los indicadores de agresión contra líderes sociales: 673 asesinatos entre los años mencionados¹, según **ODEVIDA**. La multiplicación de actores armados —viejas estructuras reagrupadas,

¹ Datos a octubre 31 de 2025.

disidencias fragmentadas y nuevas economías ilícitas— coincidió con la ausencia de una política de protección eficaz y con una capacidad estatal limitada para ejercer autoridad territorial. En amplias zonas del país, la promesa de negociación se tradujo en treguas parciales o ceses frágiles que redujeron enfrentamientos directos con la Fuerza Pública, pero no disminuyeron los riesgos para las comunidades ni el control armado sobre sus vidas. El resultado fue un escenario híbrido, donde la violencia cambió de forma más que de intensidad: menos combates, más asesinatos selectivos, más control social y una creciente normalización de la coerción como forma de gobernanza local.

En ese contexto, la promesa de Gustavo Petro de una paz total se tradujo en una oferta amplia de negociación con todos los grupos, sin delimitación clara de propósitos ni evaluación de capacidades estatales. En muchos casos, las negociaciones comenzaron sin información suficiente —ni militar ni de inteligencia— sobre los interlocutores.

El informe conjunto de PARES y Vivamos Humanos (2025) sobre la política de paz total y sus mesas de negociación detalla los avances y obstáculos de cada proceso. En síntesis, la paz total registró tres ceses al fuego bilaterales (con el ELN, el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frentes) y varios acuerdos parciales, como las treguas entre los Shottas y los Espartanos en Buenaventura o el pacto de no agresión en el Espacio de Conversación Sociojurídica (ECSJ) de Medellín y Valle de Aburrá.

Sin embargo, la paz total nunca se consolidó como política pública estructurada ni logró articular las capacidades de los distintos ministerios. Su lógica suponía que el desmonte progresivo de los grupos armados iría acompañado de la implementación de planes de infraestructura, servicios públicos y vías terciarias que restaran legitimidad a su control territorial. Esa coordinación nunca ocurrió.

Finalmente, el 2025 se caracterizó por el congelamiento prácticamente todos los esfuerzos de diálogo o negociación y la concentración en acciones militares, incluyendo la declaratoria de estado de excepción para el Catatumbo, el nombramiento de un militar como ministro de defensa² - Pedro Sánchez – y operaciones de militarización de largo aliento como la Operación Perseo en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia en el Cauca.

² Aunque Pedro Sánchez se retiró de las Fuerzas Armadas inmediatamente notificaron su nombramiento, su carácter de retiro es más formal que real.

Para explicar mejor el estado actual de las disputas armadas actualmente, este capítulo se centrará en identificar factores fundamentales como quiénes ejercen hoy la violencia armada, qué tipo de violencia ejercen, cómo ocurre, en dónde y por qué, analizando cada una de estas preguntas comparativamente en los momentos señalados con anterioridad (2019 – 2022 – 2025).

Principales hallazgos del periodo 2018–2025

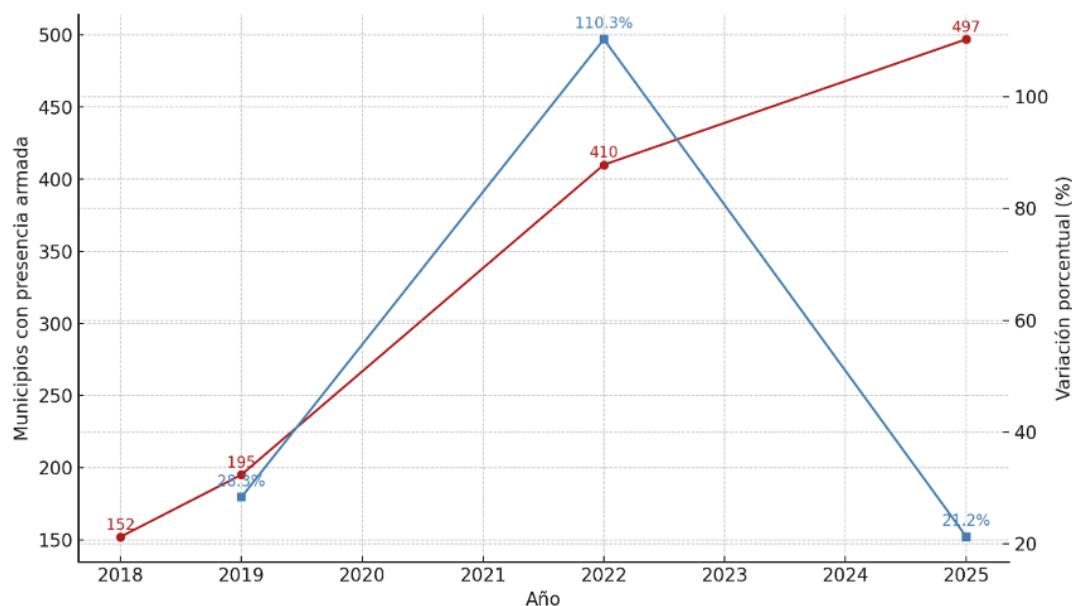
- La paz total no promovió el crecimiento de los grupos armados entre 2022 y 2025, pero tampoco logró impedirlo ni ralentizarlo.
- Los ceses al fuego tuvieron impactos humanitarios localizados, especialmente en la reducción de enfrentamientos entre el Estado y los grupos. Sin embargo, no hubo correlación positiva en acciones armadas encaminadas a lograr o consolidar control territorial.
- El desarme sigue siendo la estrategia más eficaz para desmontar actores armados, pero la ausencia de presencia estatal posterior facilitó el rearme y expansión. No obstante, las variables de mercado como precio de cocaína, del oro y el incremento de la extorsión pesaron sustancialmente la capacidad de armarse
- Todos los grupos armados crecieron entre 2018 y 2025 a ritmos similares, lo que muestra la debilidad de la acción estatal para la prevención del surgimiento y expansión de grupos armados.
- El Estado colombiano no cuenta con una política de protección efectiva que impida o por lo menos mitigue sustancialmente el asesinato de líderes sociales, defensores de DDHH, comunidades étnicas, campesinas y pobladores rurales, por lo menos desde el 2018.

2. ¿Quiénes hacen y en dónde hacen presencia armada? Crecimiento de los grupos armados en Colombia 2018 – 2025

La medición de presencia armada que se hace a continuación tiene como principal fuente el monitoreo realizado por la Fundación Paz y Reconciliación, cuya metodología se explicita en el apartado respectivo de este informe. Para efectos prácticos, cuando se habla de presencia, es importante aclarar que ésta no corresponde a control territorial. Sin embargo, esta es cada vez más la realidad de comunidades que habitan veredas y corregimientos, pero también de zonas urbanas que hoy experimentan dinámicas similares. Identificar la presencia sostenida de uno u otro grupo en distintos municipios permite, además, entender mejor las relaciones de disputa, coexistencia o competencia que se configuran en los territorios. Ese conocimiento es clave para orientar decisiones de seguridad y para diseñar iniciativas de paz ajustadas a cada contexto.

Según el análisis de presencia municipal de actores armados, entre 2019 y 2025 lo primero que salta a la vista es el número de municipios donde se registra presencia de al menos un grupo armado organizado – en adelante GAO. Para el año 2019, como consecuencia directa de la desmovilización de las FARC-EP por los acuerdos de paz del año 2016, el número de municipios con presencia de al menos un grupo armado se empezó a incrementar paulatinamente, teniendo un fuerte salto entre el 2019 y el 2022, dónde – como se explica en el gráfico a continuación – se pasa de 195 a 410 municipios.

Gráfico 1. Número de municipios con presencia armada ilegal y variación porcentual.



Fuente: Fundación PARES, bases de datos históricas de presencia armada y monitoreo³.

Procesamiento propio.

El aumento superior al 110% en el número de municipios afectados no fue un crecimiento disperso, sino la expresión de un proceso de reacomodo de estructuras donde el efecto de la pandemia, como lo hemos explicado anteriormente tuvo un peso importante, especialmente en los flujos de dinero hacia economías ilícitas y grupos armados y en el incremento de valor estratégico del control territorial en las fronteras terrestres y marítimas, ante los cambios en la economía del narcotráfico.

En estos años, distintos actores aprovecharon la desaceleración institucional, la ruptura de pactos locales de gobernanza y el aumento de los incentivos asociados a economías ilegales para ocupar o disputar zonas que, hasta entonces, mantenían niveles de mayor estabilidad.

La reocupación acelerada de los antiguos corredores de las FARC explica buena parte del salto del periodo. Las disidencias del Frente 1,

³ Para conocer la composición de las bases de datos y presencia se pueden remitir al apartado metodológico del presente informe.

el Frente 7, el bloque liderado por Gentil Duarte y, posteriormente, la Segunda Marquetalia, extendieron su presencia en territorios donde la reincorporación quedó incompleta o fragmentada. Regiones como Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo y Caquetá se transformaron en áreas de recomposición organizativa y expansión operativa. Esa reconfiguración obedeció tanto a la posibilidad de retomar economías como la coca y la minería en frontera, como a la apertura de pasos fluviales y corredores estratégicos que, tras 2016, habían quedado sin un actor dominante.

Paralelamente, el Clan del Golfo ahora Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) protagonizó una expansión sostenida en el noroccidente del país. Su modelo de operación —flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales— le permitió avanzar sin necesidad de confrontaciones abiertas. Entre 2019 y 2022 amplió su presencia en Urabá, Bajo Cauca, Córdoba, el norte del Chocó y parte del Magdalena Medio. Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente.

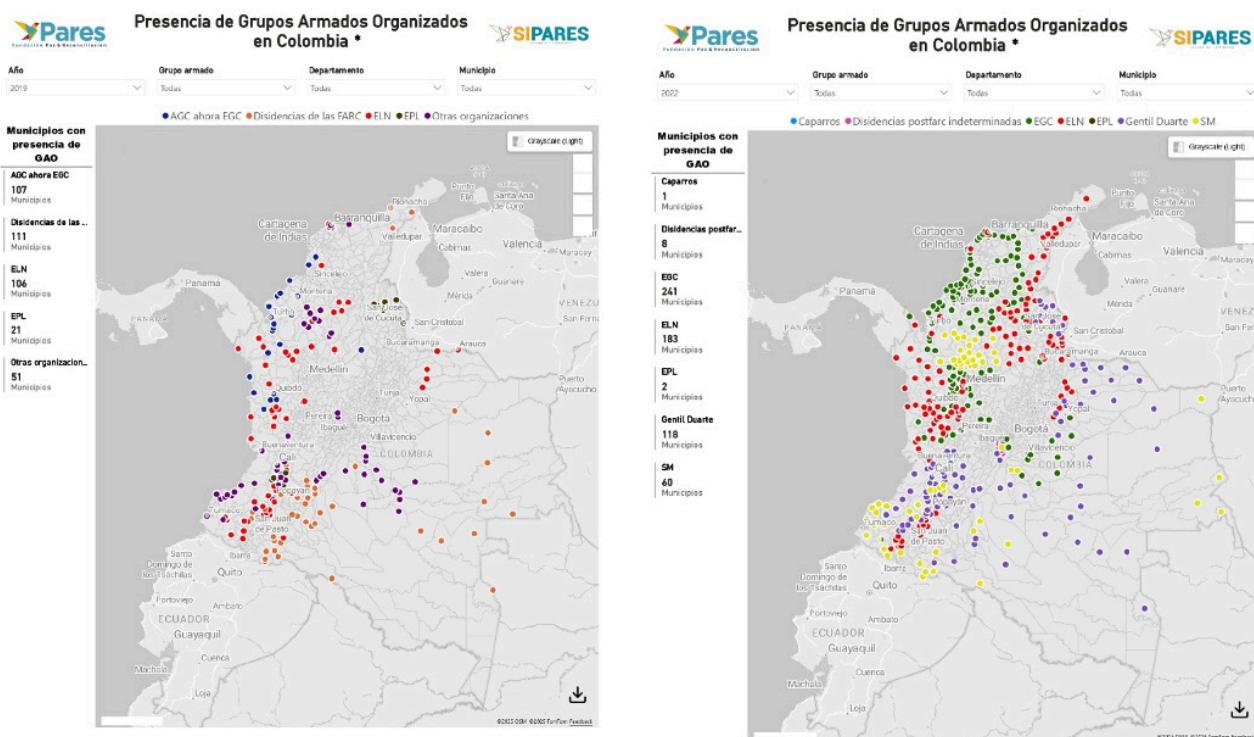
El periodo también estuvo marcado por una reconfiguración violenta en las fronteras nororiental y sur del país. En Arauca se consolidó una disputa de alta intensidad entre el ELN y las disidencias, con consecuencias directas sobre la población civil. En Catatumbo, mientras tanto, la entrada de nuevas estructuras criminales—including células del Tren de Aragua y otras células urbanas de delincuencia organizada—se sumó a la presión existente entre ELN, EPL residual y el Clan del Golfo. En Nariño, particularmente en el Pacífico sur, confluyeron disidencias, EGC, Comandos de Frontera y actores vinculados a organizaciones mexicanas (Fundación PARES, 2020), generando una competencia continua por rutas marítimas, cultivos y puertos clandestinos.

Finalmente, la expansión no se limitó a áreas rurales remotas. Entre 2019 y 2022 se incorporaron a las mediciones varias ciudades intermedias que funcionan como nodos logísticos de economías ilegales. Cúcuta, Buenaventura, Tumaco, Pasto, Barrancabermeja y parte del corredor Cesar–Guajira registraron presencias sostenidas o crecientes de grupos armados. Este fenómeno señala una tendencia que el informe denomina “urbanización parcial del control criminal”, que, si bien no es nueva en la historia de Colombia, en este período implicó la captura de segmentos estratégicos como la extorsión, el microtráfico, las rentas

de movilidad y la presión sobre autoridades locales, y un control mucho más extendido de la delincuencia organizada en espacios urbanos.

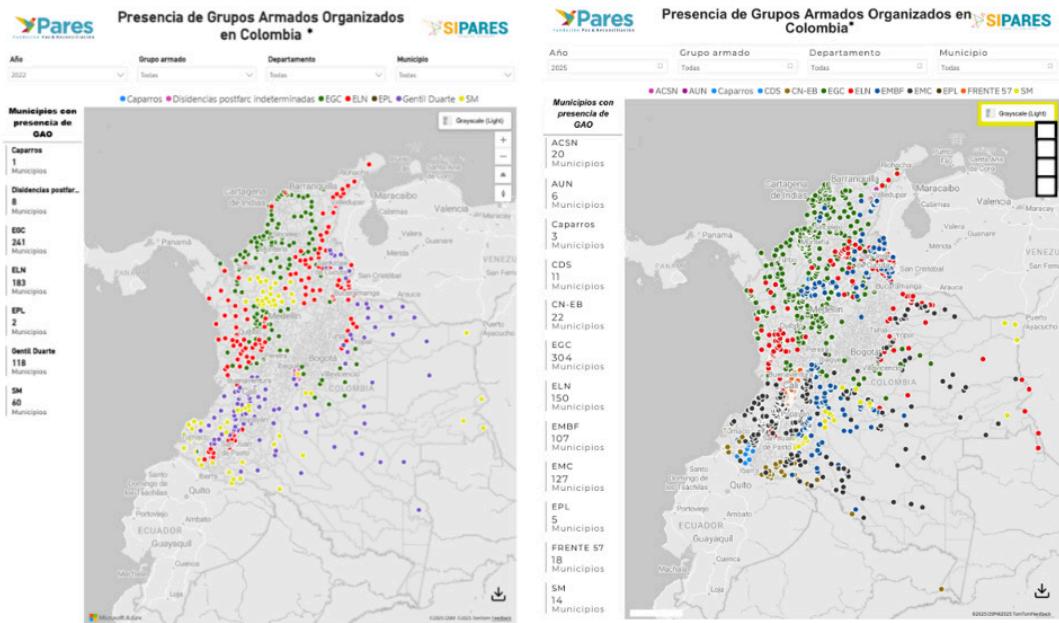
En los mapas que se presentan a continuación se observa el crecimiento de los grupos armados entre 2019 y 2025. El gráfico 2 muestra, además, la evolución diferenciada por actor: ELN; Clan del Golfo/AGC/EGC; disidencias (Segunda Marquetalia, EMC y EMBF); y otros (ACSN, Caparros, EPL y Comuneros del Sur). Como indican las líneas de tendencia, los grupos de mayor expansión fueron, en ese orden, el EGC y, posteriormente, el conjunto de las disidencias de las FARC. El ELN, por su parte, tuvo un repunte entre 2019 y 2022, pero redujo su presencia municipal hacia 2025. Dado que algunas de estas categorías no existían en 2022, la comparación se realiza usando la presencia agregada de las disidencias como categoría general para garantizar la consistencia del análisis.⁴

Mapa 1. Número de municipios con presencia de actores armados 2019 – 2022.



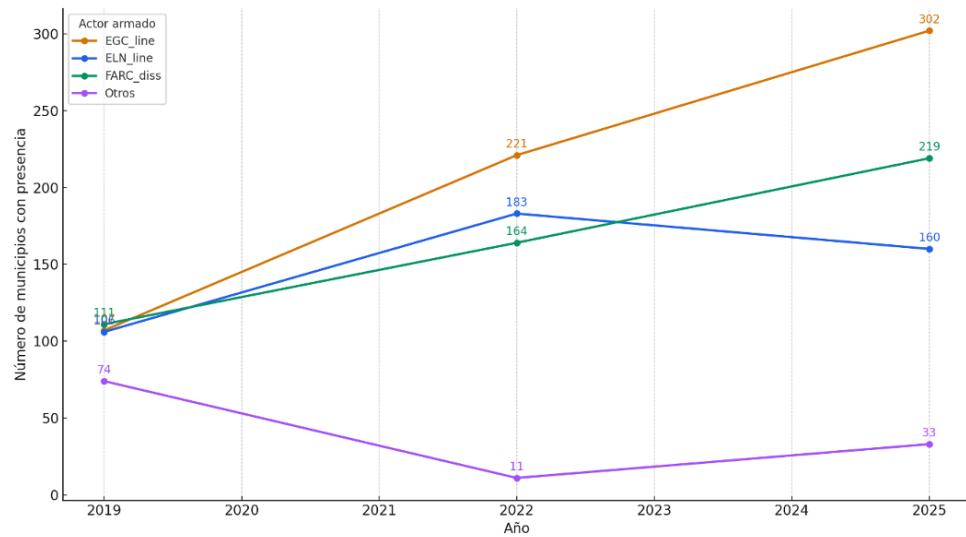
4 En este link interactivo se pueden consultar los mapas y realizar filtros por año, actor armado, y el departamento. Microsoft [Power BI](#)

Mapa 2. Número de municipios con presencia de actores armados 2022 – 2025



Fuente: Fundación PARES, bases de datos históricas de presencia armada y monitoreo⁵.

Gráfico. 2. Crecimiento en la presencia municipal de grupos armados 2019 – 2025.
Fuente: Monitoreo de presencia de actores armados Fundación Paz y Reconciliación



Fuente: Fundación PARES, bases de datos históricas de presencia armada y monitoreo

⁵ Para conocer la composición de las bases de datos y presencia se pueden remitir al apartado metodológico del presente informe.

Tabla 1 Crecimiento en número de municipios con presencia y variación por período analizado⁶

Actor	2019	2022	2025	Variación % 2019→2022	Variación % 2022→2025
Línea AGC/EGC	107	221	302	+106.5%	+36.7%
Línea ELN	106	183	160	+72.6%	-12.6%
Línea disidencias FARC	111	164	219	+47.7%	+33.5%
Otros (ACSN, EPL, Caparros, Frente 57)	74	11	33	-85.1%	+200.0%

Crecimiento del EGC

El crecimiento y la persistencia del EGC/AGC se explican fundamentalmente por un conjunto acumulado y heredable de recursos (materiales, organizativos, relationales y simbólicos) que permite a los grupos sobrevivir, recomponerse y adaptarse entre ciclos de violencia (Bonilla, 2025). Puntualmente, el crecimiento se debe a su capacidad y alcance de implantación territorial, parte de la cual se heredó de antiguas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en el 2006 y de las cuáles absorbió varios mandos, redes, aprendizaje y contactos. La segunda capacidad es la diversificación de economías ilícitas que se alimentó del cierre de la frontera venezolana y de la capacidad del grupo para controlar el tráfico de migrantes por el Darién, la capacidad de dar bienes y servicios en los cierres de pandemia (2020 y 2021 especialmente) y los cambios ya señalados en la economía del narcotráfico, precios del oro al alza y capacidad de absorción de facciones rivales o en competencia.

6 Nota metodológica:

Línea AGC/EGC: Incluye los grupos menores que fueron absorbidos por esta estructura entre 2019 y 2022, consolidándose como el principal articulador de economías y violencias locales.

Línea ELN: Para las mediciones de 2019 y 2022, el grupo hoy conocido como Comuneros del Sur estaba integrado dentro del ELN, por lo cual su actividad se contabiliza dentro de esta línea.

Línea disidencias FARC: Agrupa a todos los grupos disidentes surgidos a partir de 2016, independientemente de su denominación, fracturas internas o comandancias. La alta variabilidad organizativa impide su medición separada en ejercicios comparados.

Otros: Comprende estructuras regionales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), EPL, Caparros y, más recientemente, el Frente 57, cuya actividad es relevante pero no alcanza la escala de las tres líneas principales.

Las absorciones de grupos menores como Rastrojos y Paisas les permitió ser un proyecto sombrilla más cohesionado con muy baja o casi nula competencia armada.

Finalmente, esta estructura aprovechó con bastante éxito el vacío post FARC y la acumulación de capital armado que se potenció por la crisis humanitaria del período Iván Duque (2018-2022) pese a la argumentada presión estatal. En el período 2022 – 2025 el crecimiento se mantuvo, a un menor ritmo, probablemente porque el grupo llegó al límite de su capacidad de expansión o porque otros grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o el propio ELN lo limitan. No obstante, la expansión a la zona minera del sur de Bolívar en el período más reciente muestra la intención explícita de incrementar su presencia en otras zonas alejadas de su centro (Antioquia – Chocó – Córdoba – Sucre).

Crecimiento del ELN



El crecimiento del ELN tiene raíces estructurales. Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, el grupo aprovechó el vacío territorial que dejó esa organización para extender su influencia en zonas donde antes no tenía presencia o donde era marginal. En 2019 operaba en 193 municipios y, para 2024, su presencia había escalado a 231 municipios, con variaciones locales tras la separación del Frente Comuneros del Sur en Nariño. Este avance se explica en parte por su estructura confederada —integrada por ocho Frentes de Guerra y cerca de cuarenta subestructuras— que otorga autonomía operativa y financiera a los mandos regionales. Esa autonomía ha demostrado ser una fuente de resiliencia frente a ofensivas estatales y frente a disputas con otros grupos armados.

La expansión también se vincula a la hibridación económica que caracteriza al ELN desde hace al menos dos décadas. El auge pospandémico de economías ilegales transnacionales —particularmente la coca y la minería ilícita— fortaleció su capacidad de financiamiento y le permitió sostener operaciones en regiones estratégicas. En el Pacífico, el ELN ha buscado posicionarse en la minería ilegal; en el Catatumbo mantiene control sobre corredores

binacionales vinculados al contrabando y al narcotráfico; y en el Cauca opera en articulación con redes que conectan el Pacífico con la frontera ecuatoriana.

El reposicionamiento político del ELN con la apertura de la mesa de diálogo en noviembre de 2022 lo convirtió en un interlocutor central de la Paz Total. Sin embargo, el proceso ha enfrentado crisis profundas por violaciones al cese al fuego, desacuerdos sobre mecanismos de verificación y tensiones internas. La ruptura del Frente Comuneros del Sur —que decidió iniciar un proceso de diálogo autónomo con el Gobierno— no solo erosionó su presencia en Nariño sino que puso de manifiesto las fracturas dentro de la organización respecto a la conducción política del proceso de negociación.

Aunque el ELN no se caracteriza por absorber grandes estructuras armadas, sí ha consolidado su dominio territorial mediante la confrontación militar y alianzas tácticas. En el Catatumbo se impuso sobre los remanentes de Los Rastrojos para controlar la frontera; en el Bajo Cauca y el Sur de Bolívar ha establecido pactos temporales con facciones del EMBF para contener el avance del Clan del Golfo; y en Cauca ha coordinado acciones con la Segunda Marquetalia contra el EMC. De manera paralela, en regiones como Vichada ha pactado con la SM para coordinar la explotación ilegal de coltán, lo que muestra una capacidad de adaptación pragmática a dinámicas locales.

El periodo 2019–2025 estuvo marcado por una escalada de violencia del ELN. Entre enero de 2023 y mayo de 2025 se le atribuyen 460 eventos violentos, incluyendo 393 posibles violaciones al cese al fuego. Su repertorio de violencia se ha centrado en toques de queda ilegales, amenazas, acciones de control social y paros armados. El pico más alto de acciones ofensivas ocurrió en septiembre de 2024. Esta intensificación refleja una estrategia de presión territorial y política que acompaña su participación en la mesa de diálogo, pero también una disputa cada vez más abierta con otros grupos armados.

La confrontación más intensa ha sido con los Frentes 10mo y 28 del EMC. La ruptura del pacto de no agresión a principios de 2022 desató una guerra abierta en Arauca, extendida posteriormente a Casanare. Desde enero de 2025, el ELN inició además una ofensiva directa contra el Frente 33 del EMBF en el Catatumbo, provocando una crisis humanitaria sin precedentes desde la firma del Acuerdo de Paz. Simultáneamente, su confrontación con el EGC/Clan del Golfo en el Sur de Bolívar y en Chocó se ha sostenido en torno al control de rutas fluviales y corredores mineros.

El grupo ha recurrido también a prácticas de tercerización criminal, contratando sicarios provenientes de otras ciudades —como Medellín y Cali— para ejecutar asesinatos selectivos en regiones fuertemente disputadas como el Catatumbo. La limitada presencia estatal en zonas fronterizas, particularmente en Venezuela, ha facilitado su expansión: en 2024 este factor explicó un aumento del 23% en su actividad en zonas limítrofes.

El proceso de diálogo, por su parte, atraviesa una crisis profunda. Las suspensiones de abril y septiembre de 2024, la tensión producida por el diálogo regional con el FCS y el señalamiento interno de una “doble política de paz” han deteriorado la cohesión del grupo y debilitado la legitimidad del proceso ante la opinión pública. Este escenario ha contribuido a un incremento en la violencia, más orientada a reafirmar control territorial que a facilitar una salida política.

En mayo de 2025, el ELN mantenía presencia en 150 municipios, una fuerza estimada entre 2.300 y 2.800 combatientes y un Índice de Capital Armado⁷ de 7.3, uno de los más altos entre los actores armados activos. Su crecimiento reciente no se explica por la absorción de grandes estructuras, sino por la consolidación oportunista de espacios disputados y por el uso sistemático de la violencia para asegurar corredores estratégicos, economías ilegales y posiciones de negociación. A pesar de haber firmado 28 acuerdos en la mesa, la persistencia de su accionar violento ha erosionado la confianza en el proceso y ha prolongado un ciclo de inestabilidad que define el panorama de seguridad del país.

Crecimiento de las disidencias



La trayectoria de las disidencias de las FARC después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 marca el inicio del tercer ciclo de violencia en Colombia. Este ciclo se caracteriza por una recomposición acelerada, una expansión territorial inédita y una naturaleza híbrida que combina continuidad con innovación organizativa. Las primeras disidencias eran grupos pequeños, integrados por frentes que se negaron a firmar el acuerdo o que lo abandonaron posteriormente.

Los frentes iniciales bajo el mando de “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”—Frente 1, Frente 7 “Jacobo Arenas”, Frente 10mo, Frente 33, Frente 36, Frente Oliver Sinisterra y Frente 29—sumaban ocho estructuras con capacidades limitadas. Sin embargo, hacia

⁷ El Índice de Capital Armado (ICA) mide el conjunto acumulado y heredable de recursos materiales, organizativos, relaciones y simbólicos que posee un grupo armado para sobrevivir, sostener coerción y gobernanza informal, absorber otras facciones y recomponerse tras choques militares o negociaciones. Este concepto se aplica para estimar la supervivencia y capacidad de continuidad de los grupos, basándose en dimensiones observables como el alcance territorial, la diversificación de economías ilícitas, la duración y la centralidad genealógica del grupo.

inicios de 2022 ya se habían transformado en organizaciones mucho más robustas bajo el nombre de Estado Mayor Central, incrementando de forma sostenida su reclutamiento, especialmente de niñas, niños y adolescentes. A este escenario se sumó el proyecto impulsado por “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” bajo el nombre de Segunda Marquetalia.

El periodo 2019–2022 estuvo marcado por un proceso simultáneo de alianzas y confrontaciones internas, mediante el cual distintas facciones buscaron construir estructuras más estables que les permitieran replicar elementos organizativos de las antiguas FARC y disputar territorios donde otros actores, como el ELN, mantenían presencia histórica —particularmente en Arauca y Nariño. En ese lapso, la proporción de municipios con presencia de disidencias aumentó un 47%, evidenciando su capacidad de expansión y recomposición. En este periodo de tiempo, el departamento del Cauca se volvió el bastión del proceso de expansión territorial de la línea de Gentil Duarte en el suroccidente del país, a través de la consolidación de diferentes frentes bajo lo hoy se conoce como el Bloque Occidental Jacobo Arenas.

En menos de cuatro años, la mayor parte de estas facciones convergió en dos grandes proyectos armados: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM). En el caso del EMC, su consolidación se vio acelerada por la apertura de un proceso de diálogo en 2022, que incluyó un cese al fuego bilateral anunciado el 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, el proceso enfrentó rupturas significativas: la suspensión de mayo de 2023 tras el reclutamiento y asesinato de menores indígenas en Putumayo, y una nueva suspensión en marzo de 2024 después de un ataque contra comunidades Nasa. Para el gobierno, estos hechos mostraron que el EMC estaba utilizando el proceso para fortalecerse militar y territorialmente.

La negociación terminó fracturando al propio grupo. Una facción, liderada por Iván Mordisco, se retiró de la mesa; la otra, encabezada por alias Calarcá Córdoba, decidió continuar en el diálogo y hoy es conocida como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

A la fecha de cierre de este informe (noviembre de 2025), el proceso con el EMBF atraviesa una crisis profunda debido a las revelaciones de Noticias Caracol sobre posibles infiltraciones de miembros de las disidencias en la Dirección Nacional de Inteligencia y sobre relaciones entre militares activos y dicha organización armada. En mayo de 2025, el EMC tenía presencia en 128 municipios, mientras que el EMBF —la facción escindida— registraba presencia en 107 municipios. Incluso tras la ruptura interna, la expansión territorial del EMC resulta particularmente notable, y confirma que la recomposición disidente

ha sido una de las dinámicas más significativas del ciclo de violencia vigente.

Por otra parte, la Segunda Marquetalia (SM) nació a partir de un grupo de excomandantes de las FARC que abandonaron el proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo de Paz. Los mencionados Márquez y Santrich, quienes justificaron su rearme argumentando incumplimientos del Estado y la necesidad de preservar el “proyecto político original”. Desde su surgimiento, la SM intentó rearticular estructuras preexistentes de las antiguas FARC, aunque con menor cohesión interna que el Estado Mayor Central (EMC).

En Putumayo, la SM incorporó inicialmente a la antigua Mafia 48, formada por exintegrantes del Frente 48, que luego se presentó como Comandos de la Frontera Bolivariano bajo el paraguas de la organización. Sin embargo, estas mismas estructuras terminaron escindiéndose en 2024 para conformar la Coordinadora Nacional – Ejército Bolivariano (CN-EB) que en Nariño, logró articular a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

El crecimiento de las disidencias pos-FARC comenzó a ser perceptible desde 2017, pero fue entre 2019 y 2022 cuando se acentuó de manera más drástica, registrando los peores indicadores de violencia desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. Esta expansión respondió a una combinación de factores estructurales.

La primera causa fue el reclutamiento masivo, especialmente por parte del EMC, que incrementó aceleradamente sus filas mediante la captación de nuevos combatientes, incluidos menores de edad, retomando prácticas que se sustentaban en los antiguos estatutos de las FARC. Este crecimiento permitió aumentar presencia territorial y capacidad operativa en plazos muy cortos.

La segunda fue la lógica económica y la degradación funcional del proyecto armado. Muchos mandos medios, históricamente responsables de las finanzas, el narcotráfico y la gestión de rentas ilegales, percibieron pocos incentivos en la reincorporación y, por el contrario, fuertes estímulos para retomar economías ilícitas altamente rentables. Esto facilitó la reorganización acelerada de redes logísticas y la recuperación de corredores estratégicos en regiones donde las FARC-EP habían tenido retaguardias consolidadas, como Cauca, Nariño, Guaviare, Putumayo, Arauca y Norte de Santander.

La tercera causa fue la fractura interna del EMC en 2024, que reconfiguró el equilibrio de poder dentro de las disidencias y generó una nueva ola de disputas territoriales. El quiebre entre la facción liderada por Iván Mordisco —que se mantuvo en armas— y la encabezada por Calarcá Córdoba —que continuó en el diálogo y conformó el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)— respondió tanto a tensiones por la negociación con el gobierno como a disputas por rutas estratégicas del narcotráfico y el control de activos criminales. Esta ruptura intensificó confrontaciones en zonas donde ambas facciones interactuaban, como Huila, Tolima, Caquetá y Guaviare, y agravó conflictos ya existentes, entre ellos la confrontación entre el EMC y el ELN en Arauca desde 2022.

Finalmente, la expansión se vio favorecida por estrategias de alianza y competencia simultánea, donde las disidencias ajustan su comportamiento según las condiciones de cada territorio. En regiones como el Sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño, frentes del EMBF —como los 18 y 36— han establecido pactos de no agresión o cooperación con el ELN para frenar el avance del EGC/Clan del Golfo. Estas alianzas tácticas, combinadas con confrontación selectiva, han permitido a las disidencias mantener flexibilidad y ampliar su influencia territorial en un entorno criminal multipolar.

Crecimiento de otros actores armados relevantes



Aunque el panorama del tercer ciclo está marcado por el ELN, el EGC y las disidencias de las FARC, en varias regiones han persistido o reaparecido estructuras que completan el mapa armado y ayudan a entender la lógica multipolar del conflicto actual. Se trata de organizaciones con trayectorias largas —como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o los remanentes del EPL— y de grupos delincuenciales urbanos que hoy participan en procesos de diálogo sociojurídico. Su importancia no radica en su escala nacional, sino en su capacidad para anclar disputas locales, modular economías ilegales y relacionarse con actores estatales y comunitarios en entornos de débil gobernanza.

El caso más notable es el de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), heredera del Bloque Resistencia Tayrona y con una presencia histórica en la Sierra Nevada de Santa Marta. A lo largo de la última década, este grupo logró consolidar un dominio estable sobre zonas rurales y urbanas, profundizando repertorios de control social, extorsión y reclutamiento. Más recientemente, ha extendido su influencia hacia municipios aledaños del Magdalena y anunciado su incursión en la región del Catatumbo. La lealtad arraigada a las redes históricas de Hernán Giraldo ha permitido legitimar su presencia ante sectores de la sociedad local, sostener disputas con el EGC y mantener su capacidad de coerción en una región estratégica para economías ilícitas. Aunque participa en un proceso sociojurídico de la Paz Total, el avance ha sido precario y no ha detenido su expansión.

También ha reaparecido el EPL, conocido en los últimos años como “Los Pelusos”. Pese a haber sido reducido a núcleos residuales, este remanente conserva capital armado heredado de las antiguas redes de autodefensa y ha vuelto a tener presencia en varios municipios del Catatumbo. Su retorno ocurre en una región donde la salida de las FARC produjo un vacío que fue rápidamente llenado por disputas sucesivas entre el ELN, el EGC y las disidencias, lo que hace del EPL un actor que reconfigura —aunque sea parcialmente— la correlación de fuerzas en uno de los corredores criminales más complejos del país. La falta de claridad sobre su mando actual y su relación con panfletos firmados por alias “David” evidencian su carácter fragmentado, pero no menos relevante para la dinámica territorial.

A este panorama, se suman los grupos armados urbanos, que representan la dimensión más localizada y, a la vez, más híbrida del tercer ciclo. En Buenaventura, las estructuras conocidas como Shottas y Espartanos participan en un Espacio de Conversación Sociojurídico que busca frenar ciclos reiterados de violencia y extorsión. En Quibdó, organizaciones como Los Mexicanos, Los Locos Yam, Revolución Cabí y otras redes de microtráfico han ensayado ceses unilaterales en medio de la presión creciente del EGC por controlar barrios que conectan con el río Atrato. En Medellín y el Valle de Aburrá, grupos como La Oficina y Los Pachelly participan en procesos urbanos que muestran avances más tangibles, aunque aún frágiles, en la reducción de homicidios y la estabilización de algunos territorios.

La presencia de estas estructuras —paramilitares residuales, grupos de autodefensa reciclados y organizaciones criminales urbanas— evidencia que el tercer ciclo no solo es un conflicto de grandes actores nacionales, sino un entramado donde múltiples organizaciones compiten, cooperan o se superponen según las economías del

territorio. Su persistencia responde al peso de su capital armado heredado, a su capacidad para absorber redes locales y a su inserción en economías ilícitas que crecieron en el posconflicto y se diversificaron tras la pandemia. En conjunto, estas organizaciones no determinan el conflicto en su totalidad, pero sí condicionan su funcionamiento cotidiano: regulan mercados, controlan movilidad, dominan barrios enteros y se articulan con los actores mayores que buscan consolidar su poder.

3. Tipos de presencia de actores armados

En Colombia, distintos analistas han intentado aproximarse a la noción de control territorial o gobernanza armada. A escala nacional, sin embargo, su medición sigue siendo compleja. Por esa razón, este informe trabaja con dos categorías que permiten avanzar en este debate. La primera es la **presencia sostenida**, que se refiere a municipios donde un actor armado ha estado presente de manera continua en todos los años analizados (2019–2025) y donde, además, su presencia ha sido prácticamente exclusiva, aun si ha enfrentado intentos esporádicos de disputa. La segunda categoría corresponde a municipios con presencias y disputas múltiples, donde convergen varios actores a lo largo del periodo.

La presencia sostenida y la disputa funcionan como dos capas distintas de la geografía del conflicto: una muestra dónde los actores logran estabilizarse y la otra señala los lugares donde esa estabilización es imposible. Leídas en conjunto, permiten identificar dónde existen mayores probabilidades de control territorial —que solo es viable con una presencia sostenida— y cuáles son los espacios donde la disputa se asocia con mayores afectaciones humanitarias.

Los municipios con presencia continua de un mismo actor operan como el esqueleto de las organizaciones armadas ilegales. Allí no solo hay permanencia física; existe también una capacidad estable para regular mercados ilegales, cobrar rentas, imponer normas informales y condicionar la vida cotidiana. La continuidad permite que el grupo disponga de tiempo, recursos y relaciones suficientes para crecer sin distraerse en disputas territoriales. En muchos casos, estas zonas son heredadas de ciclos previos de violencia: los grupos actuales reemplazan actores, pero no las lógicas de control, de modo que la infraestructura social y económica del conflicto permanece prácticamente intacta.

Por ello, en estas áreas es más probable que la presencia armada termine institucionalizándose y que se consolide una gobernanza coercitiva densa, con repertorios de regulación más estables y vínculos más arraigados con actores políticos locales. La presencia estatal, lejos de disputar ese control, suele acomodarse, ausentarse o coexistir. Que un mismo actor armado permanezca durante seis o siete años consecutivos—y con mayor razón durante décadas—indica que posee la capacidad de imponer reglas, resolver disputas internas y administrar economías legales e ilegales sin interrupciones significativas.

El segundo tipo de presencia, **la disputa sostenida**, revela el paisaje opuesto: territorios donde la concurrencia de varios actores indica una vulnerabilidad prolongada. Allí el control nunca termina de consolidarse y las comunidades deben vivir entre fuerzas en competencia o coexistencias armadas siempre tensas. Es el caso de Arauca, donde, pese a la presencia histórica del ELN y al dominio que ejerce en varios municipios, el departamento nunca ha estado exento de una competencia armada constante: primero con las FARC-EP y, posteriormente, con sus disidencias, hoy representadas por el Frente 10mo del EMC.

En estos territorios se observan ciclos continuos de incursión, repliegue y reaparición. El actor dominante despliega manifestaciones de fuerza más intensas —amenazas, cooptación, imposición de normas y permisos—, mientras la disputa se alimenta de la competencia por economías estratégicas, legales e ilegales, como rutas del narcotráfico, cultivos de coca, minería, control de cadenas logísticas y contrabando. La alta rotación de repertorios de violencia —de las amenazas al desplazamiento y luego al confinamiento— se combina con un deterioro particular de la gobernabilidad local: ni los actores armados ni las autoridades formales logran estabilizar reglas de funcionamiento mínimas.

La disputa sostenida ilumina una dimensión clave del conflicto colombiano: la ausencia de un ganador no implica ausencia de control, sino la instalación de una presión militar, económica y social permanente sobre los territorios. Es el espacio de mayor imprevisibilidad para la población.

En el mapa 3 se observan los municipios que presentan alguna de estas dos configuraciones: presencia armada sostenida o disputa sostenida durante el período analizado. En total, 268 municipios registran presencia armada constante, mientras que 161 pueden catalogarse como de alta disputa. En el resto, la presencia armada ha sido marginal, temporal u ocasional.

Zonas de Presencia Sostenida

La presencia sostenida se concentra en corredores donde los actores armados han logrado construir capacidades organizativas estables y formas de gobernanza ilegal con distintos grados de arraigo social. Se identifican cuatro grandes núcleos:

- **Arco amazónico-orinoquense (Guaviare, Caquetá, Meta, Putumayo, Vaupés):** territorios con baja presencia estatal, continuidad geográfica de selva densa y economías ilegales de extracción consolidadas (coca, minería, deforestación, extracción y tráfico de especies). Varias estructuras del EMC, bloques disidentes y organizaciones asociadas mantienen allí un control estable y funcional.
- **Catatumbo y frontera nororiental:** presencia persistente del ELN y ocasional de otras estructuras como Frente 33 (disidencia) o EPL articuladas a dinámicas transfronterizas. En estos municipios, la estabilidad deriva de un sistema de tributación criminal y de formas de regulación social que han operado durante años.
- **Pacífico nariñense y caucano:** configuración policéntrica en la que convergen EMC, Segunda Marquetalia, Comandos de Frontera, ELN y EGC. Aquí la presencia sostenida responde a la articulación entre cultivos de uso ilícito, minería ilegal, control fluvial y acceso a corredores del Pacífico, así como a la frontera con el Ecuador.
- **Urabá, Bajo Cauca y sur de Córdoba:** hegemonía del EGC sobre rentas mineras, extorsión, control de movilidad y corredores estratégicos, así como el control de cadenas logísticas para economías ilícitas. La presencia sostenida adopta aquí la forma de un sistema de gobernanza criminal estable, con baja competencia interna.

Zonas de Disputa Sostenida

Los 161 municipios con disputa coinciden en ser escenarios donde persiste la competencia armada por el control de rentas, corredores y población. Los principales focos se ubican en:

- **Cauca y Nariño:** epicentro de la disputa entre estructuras armadas hoy en el país. Convergencia de EMC, Segunda Marquetalia, ELN, EGC y estructuras locales en distintos tramos de cordillera y litoral. La disputa combina enfrentamientos, imposición de normas locales y rotación frecuente de actores.
- **Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar:** territorios atravesados por minería ilegal, cultivos de coca y rutas de movilidad. La interacción entre EGC, ELN, disidencias y estructuras locales produce patrones de confrontación recurrente.
- **Arauca:** disputa de carácter político y organizativo entre ELN y disidencias, con efectos directos sobre la población civil y las instituciones locales.
- **Chocó (San Juan, Baudó) y Pacífico medio:** superposición de actores con intereses sobre rutas fluviales y control del litoral. La disputa se expresa en confinamientos, desplazamientos y rupturas de pactos locales.
- **Meta, Guaviare y Putumayo en zonas de frontera interna:** competencia entre disidencias que se reacomodan en ciclos cortos.

Si bien aún no ha sido posible establecer una metodología que permita medir cuántos municipios de Colombia pueden tener gobernanza criminal consolidada y a qué nivel (veredal, centros poblados, barrial), al menos de una forma nacional, los municipios con presencia sostenida tienen una mayor probabilidad de que esta se desarrolle y de “lidiar” con la entrada de competidores. Esta concentración se concentra en Caquetá, Guaviare, Meta, Urabá, Sur de Córdoba y Nariño.

Por el contrario, las zonas donde existe disputa crónica como por ejemplo el departamento de Arauca tienden a tener mayores indicadores de violencia indiscriminada contra civiles y a un mayor uso de formas violentas de control social.

Mapa 3. Municipios con presencia sostenida de un actor armado vs municipios con alta disputa sostenida. Fuente: monitoreo PARES de actores armados



Tipos de presencia de grupos armados por municipio.
Presencia sostenida vs disputa sostenida

● Presencia sostenida de actor armado ● Alta disputa o disputa sostenida

**Tipos de
presencia**

Disputa
sostenida

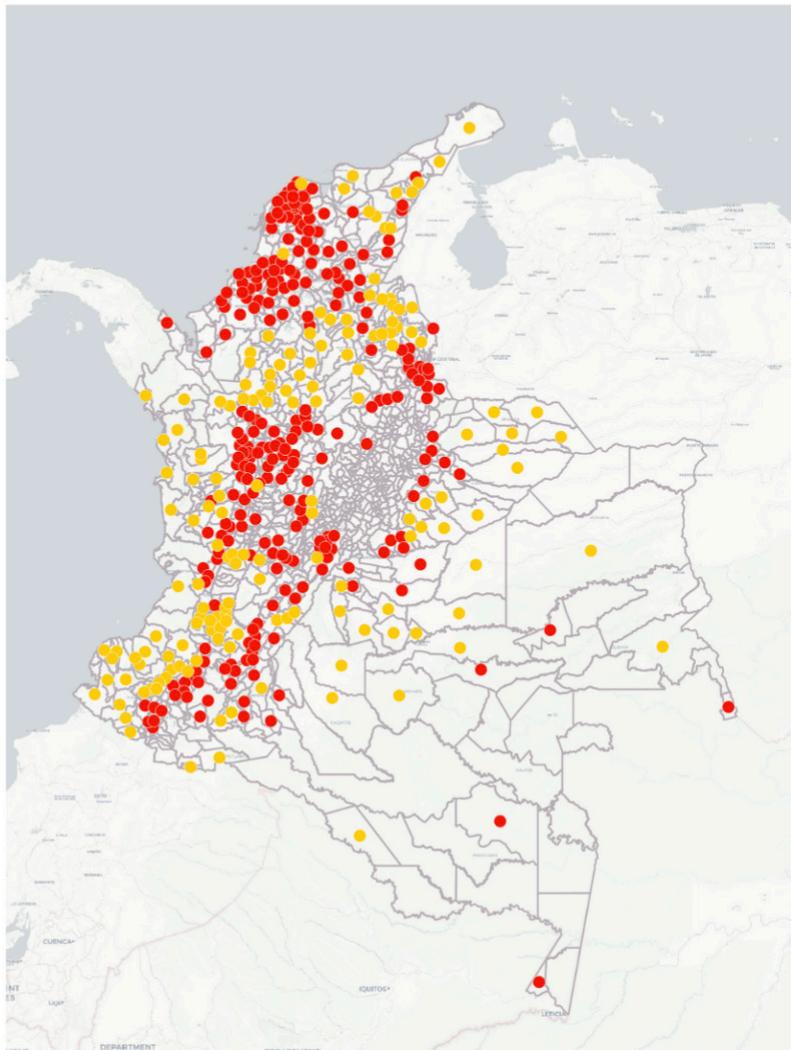
161

Municipios

Presencia
sostenida

268

Municipios



0 100 200 km



BIBLIOGRAFÍA

UNODC. (2022). World Drug Report . Vienna : United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_4.pdf

Fundación PARES y Vivamos Humanos . (2025). La paz ¿cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogo de paz en Colombia entre 2022-2025. Bogotá : Fundación Paz y Reconciliación .

INDEPAZ. (2025). Una tendencia que mata: el fracaso del Estado en la protección de líderes sociales . Bogotá : INDEPAZ. Retrieved from <https://indepaz.org.co/una-tendencia-que-mata-el-fracaso-del-estado-en-la-proteccion-de-los-liderazgos-sociales/>

Bonilla, L. (2025). Reciclajes y mutaciones de la violencia en Colombia . In C. Niño, & S. Tolosa , Transiciones posibles de la guerra y la paz en Colombia a casi una década del Acuerdo de paz. (pp. 159 - 203). Bogotá : FESCOL - El Espectador .

Fundación PARES. (2020). Lo que nos arrebato la pandemia. Bogotá: Planeta.

Fundación PARES. (2020). Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos en Colombia. Bogotá: Fundación PARES.

